



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO



Tesis

**La sanción por falsa declaración en la colaboración eficaz y el
ámbito de aplicación del artículo 409 del Código Penal**

Autor:

Bach. Cherres Salazar Jean Pool

Asesor:

Mag. Vargas Rodríguez Cesar

Para optar el título profesional de Abogado

Fecha de sustentación: 01 de abril del 2024


Lambayeque, 2024

Tesis titulada “La sanción por falsa declaración en la colaboración eficaz y el ámbito de aplicación del artículo 409 del Código Penal”,
presentada para optar el título profesional de Abogado, por:



Bach. Cherres Salazar Jean Pool

Autor



Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ

Asesor

Aprobado por:



Mag. CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS
Presidente del Jurado



Dr. FREDDY WIDMAR HERNÁNDEZ RENGIFO
Secretario del Jurado



Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA
Vocal del Jurado.

Dedicatoria

A Dios.

*A mis padres Wilmer y Carmen, mis hermanas
Perla y Selene; quienes siempre me apoyaron de
manera incondicional.*

*A mis tíos Marilú y Joaquín, quienes también me
dieron todo su apoyo desde muy pequeño.*

*A mi abuelo, Segundo Salazar Flores, que desde
el cielo siempre me cuida*

Agradecimiento

A mi alma mater, por formarme

para la vida profesional

A mis padres, por siempre darme su apoyo



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
UNIDAD DE INVESTIGACION



ACTA DE SUSTENTACIÓN

ACTA DE SUSTENTACIÓN PRESENCIAL N° 31-2024-UI-FDCP

Sustentación para optar el Título de ABOGADO de: **Jean Pool Cherres Salazar**.

Siendo las 4:00 p.m. del día lunes 01 de abril del 2024 se reunieron en la Sala de simulación de audiencias 1 de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", los miembros del jurado evaluador de la tesis titulada: "**LA SANCIÓN POR FALSA DECLARACIÓN EN LA COLABORACIÓN EFICAZ Y EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 409 DEL CÓDIGO PENAL**", designados por Resolución N° 124-2023-FDCP-VIRTUAL de fecha 31 de marzo del 2023, con la finalidad Evaluar y Calificar la sustentación de la tesis antes mencionada, por parte de los Señores Catedráticos:

PRESIDENTE : Mag. **CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS**.

SECRETARIO : Dr. **FREDDY WIDMAR HERNÁNDEZ RENGIFO**.

VOCAL : Mag. **CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA**

La tesis fue asesorada por Abog. **CESAR VARGAS RODRIGUEZ**, nombrada por Resolución N°124-2023-FDCP-VIRTUAL de fecha 31 de marzo del 2023.

El acto de sustentación fue autorizado por Resolución N° 169-2024-FDCP-VIRTUAL de fecha 21 de marzo del 2024.

La tesis fue presentada y sustentada por el bachiller **Jean Pool Cherres Salazar** y tuvo una duración de 30 minutos. Después de la sustentación y absueltas las preguntas y observaciones de los miembros del jurado; se procedió a la calificación respectiva, obteniendo el siguiente resultado: **APROBADO** con la nota de 16 (DIECISEIS) en la escala vigesimal, mención de BUENO.

Por lo que queda **APTA** para obtener el Título Profesional de **ABOGADO**, de acuerdo con la Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Siendo las 5 : 20 .m., del mismo día, se da por concluido el acto académico tomando la juramentación respectiva y suscribiendo el Acta los miembros del jurado.

Lambayeque, lunes 01 de abril del 2024

Mag. **CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS**
Presidente del Jurado

Dr. **FREDDY WIDMAR HERNÁNDEZ RENGIFO**
Secretario del Jurado

Mag. **CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA**
Vocal del Jurado.

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ, Docente/ Asesor de tesis/ Revisor del trabajo de investigación del bachiller en DERECHO Jean Pool Cherres Salazar, Titulada LA SANCIÓN POR FALSA DECLARACIÓN EN LA COLABORACIÓN EFICAZ Y EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 409 DEL CÓDIGO PENAL, luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma tiene un índice de similitud de 12% verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 21 de febrero del 2024



Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ

DNI: 16484422

ASESOR



Bach. Jean Pool Cherres Salazar

DNI: 79135719

Autor

La sanción por falsa declaración en la colaboración eficaz y el ámbito de aplicación del artículo 409 del Código Penal

INFORME DE ORIGINALIDAD

12%	12%	2%	2%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	repositorio.unprg.edu.pe	4%
	Fuente de Internet	
2	hdl.handle.net	3%
	Fuente de Internet	
3	www.tdx.cat	1%
	Fuente de Internet	
4	repositorio.usmp.edu.pe	<1%
	Fuente de Internet	
5	repositorio.unprg.edu.pe:8080	<1%
	Fuente de Internet	
6	archive.org	<1%
	Fuente de Internet	
7	sigloxxi.com	<1%
	Fuente de Internet	
8	Submitted to Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo	<1%
	Trabajo del estudiante	



Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ

DNI: 16484422

ASESOR

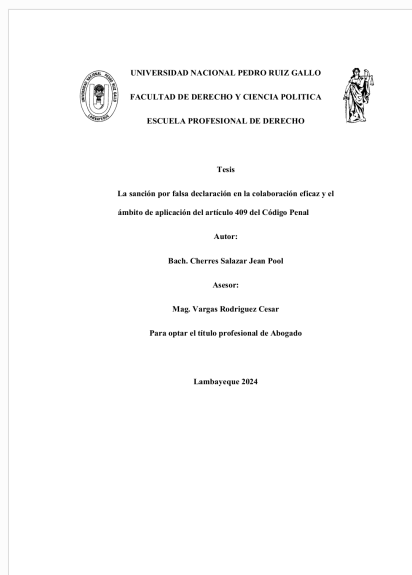


Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por **Turnitin**. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Jean Pool Cherres Salazar
Título del ejercicio: Quick Submit
Título de la entrega: La sanción por falsa declaración en la colaboración eficaz y ...
Nombre del archivo: TESIS_CHERRES_SALAZAR_JEANPOOL.docx
Tamaño del archivo: 127.62K
Total páginas: 91
Total de palabras: 17,027
Total de caracteres: 90,331
Fecha de entrega: 16-feb.-2024 06:58p. m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega: 2296778426



Derechos de autor 2024 Turnitin. Todos los derechos reservados.

Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ

DNI: 16484422

ASESOR

Índice general

Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Índice general	v
Índice de tablas.....	ix
Resumen	x
Abstract	xi
Introducción	12
Capítulo I.....	16
La metodología aplicada en la investigación	16
1.1. El planteamiento del problema.....	16
1.2. La formulación del problema	18
1.3. La justificación de la investigación	18
1.4. La importancia de la investigación.....	19
1.5. Los objetivos	20
1.5.1. El objetivo general	20
1.5.2. Los objetivos específicos	20
1.6. La hipótesis	20
1.7. Las variables.....	21
1.7.1. La variable independiente	21

1.7.2. La variable dependiente.....	21
1.8. Los métodos aplicados en la investigación	21
1.8.1. Método exegético jurídico.....	21
1.8.2. Método sistemático jurídico	22
Capítulo II	23
La sanción por falsa declaración y la colaboración eficaz	23
2.1. Los trabajos previos a la investigación	23
2.2. El origen y justificación de las sanciones penales.....	25
2.3. Los fundamentos y finalidad del proceso especial de colaboración eficaz en el Perú.....	28
2.4. Fundamentos de la sanción por falsa declaración	32
Capítulo III	35
La aplicación del artículo 409 del Código Penal.....	35
3.1. Definición doctrinaria del falso testimonio	35
3.2. La concepción del perjurio en la teoría jurídica	39
3.3. Fundamentos y ámbito de aplicación	42
Capítulo IV	46
Análisis y resultados de la investigación.....	46
4.1. Resultados del análisis de información mediática sobre la existencia de colaboradores eficaces que han declarado falsamente	47
4.2. Comparación del contenido normativo	50

Capítulo V	57
Contrastación de la hipótesis.....	57
5.1. Discusión de los resultados	57
5.1.1. Discusión sobre el objetivo específico: “Desarrollar doctrinariamente los fundamentos para la sanción por falsa declaración a fin de reconocer su viabilidad en la ley de colaboración eficaz”	57
5.1.2. Discusión sobre el objetivo específico: “Observar los fundamentos punitivos que justifican la aplicación del artículo 409 del CP, para reconocer su ámbito de protección”	68
5.1.3. Discusión sobre el objetivo específico: “Analizar la incidencia de acuerdos de colaboración eficaz revocados en los procesos contemplados en su ley”.....	72
5.2. Validación de las variables.....	76
5.2.1. Validación de la variable independiente: “La sanción por falsa declaración en la ley de colaboración eficaz”	76
5.2.2. Validación de la variable dependiente: “El ámbito de aplicación del artículo 409 del CP”.....	78
5.3. Contrastación de la hipótesis.....	81
5.3.1. Determinación final.....	81
Conclusiones	83
Conclusión general	83
Conclusiones específicas.....	83

Recomendaciones.....	85
Bibliografía.....	87

Índice de tablas

Tabla 1: Evaluación de los casos judiciales con la participación de colaboración eficaz y la declaración falsa.....	47
Tabla 2: cuadro analítico de la Ley de Colaboración Eficaz respecto a los efectos jurídicos contra el colaborador que declara falsamente	50
Tabla 3: análisis normativo del artículo 409 del Código Penal.....	52
Tabla 4: cuadro de contrastación de la hipótesis.....	82

Resumen

El desarrollo de esta tesis se ha enfocado en determinar si la ausencia de sanción por falsa declaración en la ley de colaboración eficaz conduce al razonamiento de la necesidad de aplicar el contenido normativo del artículo 409 del CP, lo cual ha impulsado la búsqueda de las justificaciones jurídicas pertinentes. Por tal razón se ha destinado el análisis teórico para reconocer los fundamentos de este contenido normativo con lo cual se ha procedido luego a la interpretación jurídica, sobre todo desde el campo de la exégesis, puesto que se evalúa el contenido gramatical de la regla.

Con la visualización del esquema normativo del artículo 409 se percibe la posibilidad de aplicar dicho concepto sobre la ausencia de regulación sancionadora de la ley de Colaboración eficaz en tanto que se verifica ello de la simple indicación de la conducta, al hablar de la falsa declaración, pero no especifica la condición sancionadora que debiera producirse como efecto de tal acción. Como resultado de esta percepción es que se condiciona positivamente la propuesta de tomar la base normativa del artículo 409 del Código Penal para suplir la ausencia de sanción advertida en el Decreto Supremo 07-2017-JUS.

Palabras clave: Falsa declaración, Colaboración eficaz, Artículo 409 Código Penal.

Abstract

The development of this thesis has focused on determining whether the absence of sanction for false declaration in the law of effective collaboration leads to the reasoning of the need to apply the normative content of article 409 of the CP, which has driven the search for justifications. relevant legal provisions. For this reason, the theoretical analysis has been intended to recognize the foundations of this normative content, which has then proceeded to legal interpretation, especially from the field of exegesis, since the grammatical content of the rule is evaluated.

With the visualization of the regulatory scheme of article 409, the possibility of applying said concept is perceived on the absence of sanctioning regulation of the effective Collaboration law as long as this is verified by the simple indication of the conduct, when speaking of the false declaration, but it does not specify the sanctioning condition that should occur as an effect of such action. As a result of this perception, the proposal to take the regulatory basis of article 409 of the Penal Code to compensate for the absence of sanctions noted in Supreme Decree 07-2017-JUS is positively conditioned.

Keywords: False declaration, Effective collaboration, Article 409 Penal Code.

Introducción

La investigación que se muestra a continuación lleva por título “La sanción por falsa declaración en la colaboración eficaz y el ámbito de aplicación del artículo 409 del Código Penal”, el mismo que se ha inspirado en el campo de acción de la colaboración eficaz como figura jurídica creada para generar apoyo a lucha contra el crimen organizado, lo cual se debe observar en función a su eficacia. Esta indicación de la eficacia muestra una condición específica en la que se presenta un sentido de frustración de la finalidad debido a la falsedad de la declaración que presenta el Colaborador que se postula como tal, situación que la ley prevé como una situación que altera el efecto de beneficio que le correspondería como tal, pero que no alcanza a cumplir el carácter de imputación que se supone debería tener la regulación.

La problemática se torna en función a la construcción legislativa que ocupa a la colaboración eficaz, puesto que no se completa la imputación que se hace o se debe hacer ante la falsa declaración del colaborador, situación que permite establecer una razón de viabilidad en relación con el carácter de imputación hacia el control adecuado de la administración de justicia. Por lo mismo que esta investigación se proyecta sobre la recopilación de fuentes jurídicas que teorizan sobre la posibilidad de imputar sobre este tipo de acciones delictivas, ello permitió verificar el vínculo entre las condiciones de

falsedad de la declaración del colaborador y lo que promueve sanción en el artículo 409 del Código Penal peruano.

Para tales efectos metodológicamente en el primer capítulo de la tesis se ha proyectado la formulación del problema mediante el siguiente cuestionamiento: ¿Qué tan adecuada resulta la ausencia de sanción por falsa declaración en la ley de colaboración eficaz como justificación para aplicar el artículo 409 del CP?

Esta interrogante es la que proyectó una respuesta inicial que se fundó en los contenidos previos al desarrollo de la investigación, esto es la hipótesis inicial de la tesis: La ausencia de sanción por falsa declaración en la ley de colaboración eficaz se puede utilizar como justificación para aplicar el artículo 409 del CP a fin de salvaguardar la correcta administración de justicia.

Tal estructura metodológica se ha construido en base a los conceptos que incorporan las variables, lo cual también en su vínculo causal destacó las metas que desarrolló la tesis, tanto la general que indicó: Determinar si la ausencia de sanción por falsa declaración en la ley de colaboración eficaz justifica la aplicación del artículo 409 del CP. En esa misma dirección se diseñaron los objetivos específicos: Desarrollar doctrinariamente los fundamentos para la sanción por falsa declaración a fin de reconocer su

viabilidad en la ley de colaboración eficaz; Observar los fundamentos punitivos que justifican la aplicación del artículo 409 del CP, para reconocer su ámbito de protección; Analizar la incidencia de acuerdos de colaboración eficaz revocados en los procesos contemplados en su ley.

Luego de esta indicación se proyectó el desarrollo en base a cada uno de tales metas, tal cual se verifica en el contenido del capítulo segundo en el que se trata sobre la naturaleza jurídica de la sanción que se produce por la falsa declaración que se ha establecido en el campo de la colaboración eficaz, partiendo por la verificación de los antecedentes que se han recopilado para el desarrollo de la investigación. Esta actividad se ha diseñado con la finalidad de establecer el vínculo entre la falsedad de la declaración y la necesidad de promover una sanción por el efecto lesivo sobre la confianza que se le otorga, esto es en razón de la administración del sistema de justicia.

También se aprecia el desarrollo de las metas específicas en el capítulo tercero que se destina a la aplicación del artículo 409 del Código Penal, sentido jurídico que se evalúa en función a la declaración falsa como concepto que se ocupa de su condición de falsedad y los efectos jurídicos que produce esta acción, nivel de lesividad que permite reconocer el vínculo que une a la sanción de este tipo penal con las características de la declaración falsa que ha sido ejecutada por el colaborador eficaz, lo cual permite solucionar la

ausencia de condiciones punitivas en la ley que controla las acciones del colaborador.

En el capítulo cuarto se ha incorporado la verificación de la realidad jurídica para lo cual se diseñó inicialmente la evaluación de los casos en los que se ha producido esta característica de falsedad en la declaración del colaborador, mostrando las condiciones lesivas no solo en el campo privado de las personas afectadas innecesariamente así como la afectación del sistema de justicia en su administración, esto último en tanto que altera la condición de certeza que debe establecer el control de la colaboración eficaz a través de su regulación sobre el sentido de los efectos sancionadores.

Toda esta connotación jurídica y de observación de la realidad es lo que permitió la discusión de todos estos resultados a fin de establecer un sentido crítico de la realidad planteada y que se consolidó en las posturas que el investigador adoptó sobre cada uno de los objetivos específicos y sobre lo cual se han diseñado cada una de las conclusiones y recomendaciones que se presentan en la parte final de la investigación así como las recomendaciones destinadas a la ampliación del campo de acción del artículo 409 del Código Penal sobre la necesidad de complementar los efectos sancionadores del Colaborador Eficaz a fin de establecer un adecuado control de los efectos de este procedimiento especial.

Capítulo I

La metodología aplicada en la investigación

1.1. El planteamiento del problema

La colaboración eficaz es aquella herramienta que busca luchar contra el crimen organizado, ya que, “(...) entre los años 2014 y 2018 se recibieron 1,507,000 denuncias de víctimas de la delincuencia y de 278,184 en el año 2014 se pasó a 371,581 en 2018” este cálculo lo aporta la Policía Nacional que representa “(...) el 72 % de los casos guardan relación con delitos vinculados al crimen organizado”. (Ministerio del Interior, 2019, pág. 22).

Es por esto que los mismos miembros de las organizaciones brinda información al ministerio público sobre el modus operandi, asimismo tiene como fin la búsqueda de la verdad en el transcurso del proceso, teniendo en cuenta que esta delaciones por parte del colaborador eficaz ayudan a la lucha contra el crimen organizado, tal es el caso que, “(...) en Brasil vienen siendo determinantes en la lucha contra la corrupción en el Perú en torno al caso Lava Jato, hasta ahora en relación a los casos vinculados a Odebrecht”. (De la Jara Basombrío & Sanchez Rios, 2018)

Esta circunstancia es importante ya que la declaración de un colaborador eficaz también puede incurrir en falsedad debido a múltiples factores pero dado la realidad existe un gran problema de que la ley de la colaboración eficaz no regula la imposición de una sanción en caso de que se brinde una falsa declaración; es por ello que, el presente trabajo trata como objetivo principal el determinar si la ausencia de sanción por falsa declaración en la ley de colaboración eficaz justifica la aplicación del artículo 409 del código penal.

Es por ello que se pretende desarrollar aquellos fundamentos doctrinarios que viabilizan la sanción ante la falsedad de las declaraciones en un proceso penal, lo cual servirá de base para reconocer como posibilidad la aplicación del artículo 409 en el ámbito de la colaboración eficaz; teniendo en cuenta, que el bien jurídico protegido de este artículo del Código penal “(...) es el correcto o normal funcionamiento de la administración de justicia o de la tarea o función jurisdiccional del Estado, procurándose evitar la construcción errónea de los juicios que formulen los jueces por los datos incorrectos (...)”. (Pierbattisti & Salatino, 2013, pág. 2)

Esta intensión normativa se proyecta con la finalidad de establecer un límite al uso indebido de la figura de colaboración eficaz. además, el análisis propuesto se ocupará de revisar las condiciones normativas limitantes en función del concurso de leyes y delitos para establecer la viabilidad jurídica

que ampare el traslado de la sanción por falsa declaración para ser aplicada de manera exclusiva sobre los colaboradores que no se encuentren procesados.

1.2. La formulación del problema

¿Qué tan adecuada resulta la ausencia de sanción por falsa declaración en la ley de colaboración eficaz como justificación para aplicar el artículo 409 del CP?

1.3. La justificación de la investigación

El desarrollo de la investigación se basa en el análisis de la participación de los colaboradores eficaces en el proceso de investigación penal, debido a que no existe una seguridad jurídica cuando estos brindan sus testimonios, afectando así la confianza de las personas en la justicia, teniendo en cuenta, que el objetivo principal del Estado es tratar de propiciar un sistema de justicia idóneo que proyecte dicha seguridad jurídica, llegando a la conclusión; que la ausencia de un adecuado control de la conducta del colaborador eficaz conllevará a una posible afectación del interés social respecto a la confianza que se tiene en el sistema de justicia.

También es posible asumir una justificación jurídica, basándonos en el estudio de las consecuencias que ha generado este tipo de conductas llegando al extremo de generar imputaciones incorrectas, tal es el caso de

prisiones preventivas injustificadas en razón a estas declaraciones falsas; entonces, frente a estas condiciones erróneas que genera el proceso, se precisa de una protección la cual podría ser derivada hacia el contenido del artículo 409 del Código Penal; para que en función a los efectos que produce estas declaraciones falsas poder atribuir responsabilidad penal a aquellos colaboradores eficaces que incurran en este desacierto.

Por último, la justificación doctrinaria será la que conduzca el análisis con las posturas adoptadas respecto al bien jurídico de la correcta administración de justicia, para conocer los alcances de protección; base jurídica que permitirá incorporar conductas particulares, ya que la falsedad de las declaraciones la generan sujetos extraprocesales.

1.4. La importancia de la investigación

La investigación proyectada resulta de suma importancia, puesto que, con los resultados obtenidos que son materia de investigación permitirá que la colaboración eficaz como proceso especial, sea dotada de mayor eficacia, incorporando la coerción que genera el ius puniendi, respecto al sentido de las declaraciones, con la intención de poder aplicar el artículo 409 del Código Penal y así poder atribuirle una responsabilidad penal al colaborador eficaz en el caso de que este brinde una falsa declaración.

De otra parte, la importancia de esta investigación se plantea en función al bien jurídico protegido del artículo 409 que se pretende ampliar para la contemplación de las declaraciones falsas en la colaboración eficaz, puesto que, si la correcta administración de justicia se fortalece con esta inclusión, se está beneficiando a la sociedad en general.

1.5. Los objetivos

1.5.1. El objetivo general

- Determinar si la ausencia de sanción por falsa declaración en la ley de colaboración eficaz justifica la aplicación del artículo 409 del CP.

1.5.2. Los objetivos específicos

- Desarrollar doctrinariamente los fundamentos para la sanción por falsa declaración a fin de reconocer su viabilidad en la ley de colaboración eficaz.
- Observar los fundamentos punitivos que justifican la aplicación del artículo 409 del CP, para reconocer su ámbito de protección.
- Analizar la incidencia de acuerdos de colaboración eficaz revocados en los procesos contemplados en su ley.

1.6. La hipótesis

La ausencia de sanción por falsa declaración en la ley de colaboración eficaz se puede utilizar como justificación para aplicar el artículo 409 del CP a fin de salvaguardar la correcta administración de justicia.

1.7. Las variables

1.7.1. La variable independiente

La sanción por falsa declaración en la ley de colaboración eficaz.

1.7.2. La variable dependiente

El ámbito de aplicación del artículo 409 del CP.

1.8. Los métodos aplicados en la investigación

El desarrollo de la contrastación de la hipótesis se ha centrado en el campo de la observación de la realidad, lo cual ha permitido incorporar la secuencia de análisis a través de los métodos que se orientan al campo jurídico, para lo cual se han tomado en consideración a los métodos de análisis jurídico de las leyes como es el caso de la exégesis jurídica así como de la evaluación sistemática de la normativa correspondiente tanto a la colaboración eficaz así como la correspondiente a la del artículo 409 del ordenamiento jurídico penal.

1.8.1. Método exegético jurídico

Las condiciones especiales de las reglas se deben observar a través de este método en función a su carácter literal, esto es a la construcción gramatical que ha utilizado el legislador para satisfacer la necesidad de control tanto en el campo de la colaboración eficaz en función a las repercusiones que operan sobre el colaborador que ejerce falsedad en su declaración, así como verificar también el sentido literal del contenido del artículo 409 del ordenamiento penal que se ocupa de sancionar la falsa declaración.

1.8.2. Método sistemático jurídico

La condición especial de la sanción que opera sobre la falsedad de la declaración que se verifica en el campo de la colaboración eficaz ha requerido de la participación analítica de la regla de colaboración eficaz, tal es el caso de su vínculo con el campo de la garantías constitucionales que deben marcar la justificación de la sanción, la condición vinculante con la normativa ofrece un efecto adecuado de la propia imputación en tanto que no afecta la protección de los derechos fundamentales de las partes. La condición sistemática implica que exista congruencia de la propia intervención del ius puniendi en relación con las acciones del colaborador eficaz, esta armonía debe establecerse con el fin de generar certeza de la protección del sistema de justicia y su administración.

Capítulo II

La sanción por falsa declaración y la colaboración eficaz

2.1. Los trabajos previos a la investigación

Se toma como antecedente de la investigación la tesis desarrollada por:

- A) Lesly Yesenia Malca Briones- La colaboración eficaz y la revocación del acuerdo en caso de falsedad de testimonio (2021), y la conclusión que arribo este trabajo es tratar de modificar el artículo 409 del Código Penal, considerando el falso testimonio del colaborador eficaz, imponiendo una sanción penal cuando este brinde información falsa en su declaración, puesto que, esto conllevaría a la posibilidad de que se dictaminen juicios erróneos sobre hechos de notabilidad jurídica poniendo en peligro la función declarativa del derecho, por ello menciona que es necesario valorar la fuerza probatoria de la declaración, evaluando la credibilidad del colaborador en cada etapa del proceso, así como su fiabilidad, incoando en los errores o contradicciones para poder llegar a la veracidad de la información conferida.
- B) Williams Alexander Robles Sevilla- La corroboración en el acuerdo de colaboración eficaz, desde la epistemología jurídica y la dogmática procesal penal (2019), teniendo como conclusión que uno de los grandes problemas de la colaboración eficaz es su escaso valor

epistemológico como medio de prueba idóneo para sustentar medidas coercitivas personales o reales y fundamentar una condena; asimismo, hace mención de que la amplia discrecionalidad del Fiscal para determinar el estándar de corroboración de la información aportada por el aspirante a colaborador eficaz, posibilita que los criterios sean sesgados o arbitrarios perjudicando la fiabilidad y eficacia de la información.

C) Pilar Rey Peña- El delito de falso testimonio en el marco de los ordenamientos jurídicos modernos (2019), teniendo como conclusión que una de las grandes problemáticas de los testigos es que, brindan falsas declaraciones en el proceso penal, pese a que los contenidos falsarios de sus declaraciones son detectados, estas conductas quedan impunes; asimismo la doctrina ha tenido una falta de interés en la escasa persecución del delito de falso testimonio desde una perspectiva actual y sobre todo amplia, que pues no solo abarcará el estudio del fenómeno desde un punto de vista descriptivo sino también valorativo, finalmente lo que busca esta investigación es poder realizar una valoración crítica y fundamentada acerca de la situación por la que atraviesa el delito de falso testimonio en la actualidad.

D) Walter Alexander Alzamora Muñoz y Rolando Barboza Lobato- La importancia jurídica del testimonio del aspirante a colaboración eficaz para aplicar la medida de prisión preventiva en los procesos de corrupción de funcionarios en la provincia de Cajamarca (2022), teniendo como conclusión que la importancia jurídica que tiene el

testimonio del aspirante a colaborador eficaz es esencial, ya que, no solo conllevaría a sustentar un posible pedido de prisión preventiva, sino que este servirá como un elemento de convicción para fundar medidas cautelares.

2.2. El origen y justificación de las sanciones penales

La prohibición de hacer declaraciones falsas bajo juramento o en juicio tiene raíces históricas en la mayoría de las tradiciones legales; en muchas culturas y sistemas legales antiguos, se castigaba a quienes proporcionaban testimonios falsos o engañosos en juicios, siendo el Derecho Romano el primero en sancionar a quien jurase en falso. En los sistemas legales modernos, “las leyes que prohíben las declaraciones falsas en juicio se han desarrollado para garantizar que los tribunales dispongan de información precisa y veraz al tomar decisiones judiciales. Esto es esencial para lograr una justicia efectiva y justa”. (Rivero Puente, 2022, págs. 11-12)

A lo largo de la historia, escasas acciones han sido tan consistentemente objeto de enjuiciamiento penal como el acto de proporcionar un testimonio falso. “Un vistazo histórico revela que, en cualquier lugar donde haya existido un proceso judicial mínimamente estructurado, también se ha contemplado una sanción legal para aquellos que emiten declaraciones mendaces o falsas” (Rey, Benlloch, & Agustina, 2019). Esto es válido para sistemas judiciales rudimentarios y tribunales

internacionales modernos; además, esta norma se aplica a sistemas legales fundamentados en creencias religiosas y a sistemas legales seculares o laicos.

Ahora, las sanciones penales peruanas tienen su origen en una combinación de influencias históricas y cumplen diversos objetivos, incluida la protección de la sociedad y la justicia. Dicho esto, las sanciones penales por falsa declaración en juicio tienen su origen en la necesidad de preservar la integridad del sistema de justicia y garantizar que se obtenga información veraz y confiable en los procedimientos judiciales. “Su justificación principal radica en la protección del proceso judicial y en la búsqueda de la verdad, así como en el mantenimiento del orden jurídico y la promoción de un juicio justo”. (Rojas Aguirre, 2022, párr. 8)

Ahora bien, las sanciones por falsa declaración en el contexto de la colaboración eficaz son fundamentales para garantizar la integridad del sistema de justicia. “La justificación principal radica en la necesidad de desincentivar la mentira y proteger la credibilidad de los testimonios en procesos judiciales” (Rivero Puente, 2022, pág. 21); es decir, la preservación de la veracidad; toda vez que, la falsa declaración puede obstaculizar la búsqueda de la verdad y perjudicar a personas inocentes.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, el falso testimonio es una infracción que a lo largo de la historia ha sido objeto de una fuerte

represión legal. Este delito presenta tres facetas distintas: uno que involucra una falta de veracidad en los testimonios dados en nombre de Dios; otro que concierne al engaño causado al juez a través de declaraciones falsas; y un tercero que afecta al individuo que sufre una injusticia como consecuencia de tales testimonios engañosos. “(...) A medida que exploramos esta transgresión a lo largo de la evolución legal, se hace evidente que la sociedad ha considerado crucial sancionar con rigor el acto de proporcionar testimonios falsos en el contexto judicial”. (Rivero Puente, 2022, pág. 19)

Misma postura que comparte Pastor Muñoz (2009), quien traduciendo al jurista alemán Urs Kindhäuser, refiere que, en el presente, tal como ocurrió en tiempos pasados, el delito de falso testimonio continúa teniendo una función crucial. Toda vez que, “se considera el principal medio que emplea el legislador para fortalecer la responsabilidad del testigo de ser veraz, contribuyendo así a garantizar que el compromiso con la verdad prevalezca sobre cualquier posible inclinación a mentir”. (pág. 19)

En esta línea de pensamiento, como fue previamente indicado por Bentham (1835), se pone de manifiesto que, “(...) de entre todas las salvaguardias diseñadas para asegurar la veracidad en los testimonios, la sanción legal se erige como la más potente y eficaz”. (págs. 95-96)

Esta afirmación subraya la importancia de imponer consecuencias legales a quienes se desvían de la verdad en sus declaraciones, ya que esta medida ejerce una influencia significativa en la promoción de la honestidad y la integridad en los testimonios ofrecidos ante los tribunales. La amenaza de sanciones legales se presenta como un incentivo poderoso para que los testigos se adhieran al deber fundamental de decir la verdad en sus declaraciones, disuadiendo así cualquier tentación de distorsionar los hechos; esta perspectiva enfatiza la relevancia de la dimensión punitiva en el sistema legal como un medio efectivo para alcanzar la búsqueda de la verdad en el ámbito judicial.

2.3. Los fundamentos y finalidad del proceso especial de colaboración eficaz en el Perú

Cuando consideramos la inclusión de herramientas legales conocidas como “Derecho penal premial”, como el testimonio del arrepentido o la colaboración eficaz, podemos identificar varios precedentes en función del sistema jurídico que se esté evaluando. Sin pretender ser exhaustivos, debemos destacar que, “en el ámbito del sistema legal basado en el *Common law*, específicamente en el Derecho británico anglosajón, encontramos el *Witness Crown*; asimismo, del sistema de Derecho anglosajón de América del Norte, emerge el sistema de acuerdos *Plea Bargaining*”. (Ortiz Pradillo & Marchena Gómez, 2018, pág. 53)

En cuanto al sistema normativo peruano, en relación al individuo que decide cooperar con las autoridades tras sentir arrepentimiento, durante la década de los años 90 se promulgaron normativas que detallaron exhaustivamente las etapas de este especial procedimiento. Robles Sevilla (2021), citando a Montoya refiere que tales regulaciones “tenían como objetivo principal dar un mayor peso y relevancia al arrepentido con el fin de incentivar su colaboración con los investigadores y su disposición para denunciar a sus cómplices o los delitos perpetrados por la organización en cuestión” (pág. 139). Estas disposiciones normativas, que sirvieron de base para la primera regulación del arrepentido (posterior colaborador eficaz) en la legislación peruana, buscaban fomentar la cooperación y el testimonio de quienes experimentaban un sentimiento de remordimiento por sus acciones criminales y delictivas.

De lo citado precedentemente se desprende la idea que el procedimiento especial de colaboración eficaz en el Perú emerge como un mecanismo legal crucial en la lucha contra la criminalidad organizada (tales como Sendero Luminoso y MRTA), y la tan enquistada corrupción; tal es así que, este proceso se estableció para fomentar la cooperación de individuos involucrados en actividades delictivas en la revelación de información relevante y la identificación de responsables (salvaguardando la identidad del colaborador), lo que contribuye significativamente a la investigación y persecución de delitos graves.

El proceso especial de colaboración eficaz en el Perú se sustenta en una serie de fundamentos clave que convergen en la búsqueda de la verdad, la justicia y la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción. “En primer lugar, este mecanismo legal se erige como un pilar esencial para enfrentar eficazmente la criminalidad organizada, al permitir que individuos implicados en actividades delictivas colaboren con la justicia para dismantelar redes criminales y exponer sus operaciones clandestinas”. (San Martín, 2015, pág. 871). Asimismo, el proceso de colaboración eficaz se orienta hacia la lucha contra la corrupción, ofreciendo la posibilidad de obtener información crítica sobre actos corruptos, involucrando a funcionarios públicos y empresarios en la revelación de estos delitos.

“La finalidad principal de este proceso radica en la obtención de información valiosa, con el propósito de que las autoridades puedan investigar y perseguir delitos con éxito, identificando a los responsables y asegurando su enjuiciamiento de acuerdo a ley” (San Martín, 2015, pág. 871). Al mismo tiempo, busca reducir penas a cambio de la cooperación de los colaboradores, creando un incentivo (beneficio) para que estos cooperen con la justicia y proporcionen datos cruciales; además, contempla la posibilidad de obtener reparación para las víctimas, recuperando activos robados o desviando recursos ilícitos hacia fines legales. En conjunto, “(...) el proceso especial de colaboración eficaz representa una herramienta fundamental en la lucha contra la impunidad y en la protección de la integridad del sistema de justicia peruano”. (Rojas López, 2012, pág. 60)

De cualquier modo, los beneficios en lo que respecta a la condena son conferidos por el Estado mediante la intervención del Poder Judicial, y básicamente, para que alguien sea considerado un colaborador eficaz, es necesario firmar un acuerdo que establezca los beneficios y la colaboración entre el fiscal y el colaborador, resultado de una negociación previa entre ambas partes. Cabe destacar que este acuerdo debe ser revisado y aprobado por un tribunal para garantizar su legalidad; siendo uno de los principios fundamentales que rige este proceso especial, “(...) la necesidad de mantener la confidencialidad, lo que significa que, en contrapartida a la información entregada por el colaborador, el sistema de justicia le brinda protección y mantiene la información en secreto”. (Gutierrez Iquise, 2018)

El siguiente punto es, la verificación de la información proporcionada por los aspirantes a colaboradores eficaces que está regulada en el artículo 473 del Código Procesal Penal; no obstante, pese a que esta etapa se encuentra dentro del proceso especial de colaboración eficaz, a la fecha no se ha desarrollado un fundamento teórico sólido que respalde su aplicación en la práctica. “Como resultado, muchos operadores legales, partes involucradas y académicos en el campo de la justicia penal en Perú parecen considerar que esta fase se deja a la discreción y el juicio del fiscal sin una guía clara predefinida”. (Robles Sevilla, 2021, pág. 40)

Desde este punto de vista, resulta esencial determinar si la colaboración eficaz logra obtener una verdad procesal con un nivel de certeza subjetiva, tal como se define en el Derecho procesal penal. En este sentido, resultaría incorrecto y muy desatinado calificar la información proporcionada por el colaborador eficaz como una verdad procesal, ya que no cumple con todas las garantías constitucionales ni menos se ajusta a la estructura procesal necesaria para aplicar los principios procesales.

2.4. Fundamentos de la sanción por falsa declaración

La colaboración eficaz como proceso especial debe estar regido por el debido proceso que incorpora pautas de control sobre la veracidad de las pruebas que en el caso de las declaraciones permitirán la incoación de medidas penales; por esta razón es que se debe controlar su veracidad, para lo cual será útil el reconocimiento del concepto de una falsa declaración. La misma que en el campo procesal se comporta como la medida de los hechos señalados por el declarante, que permita al magistrado “(...) la averiguación de los hechos, pues sólo en ese supuesto se crea, a través de la declaración no verdadera, un tipo de confianza capaz de perjudicar la confiabilidad de la comprobación del hecho”. (Ulrich, 2008, pág. 26)

De ese mismo modo, sería necesario que el magistrado tenga una valoración pertinente, en cuanto a estas declaraciones, puesto que, en aquellos “(...) procesos penales relacionados con la delincuencia organizada, se han

visto contaminados con numerosas declaraciones falsas” (Ruiz Munilla, 2012, pág. 34); entonces, ante esta problemática generada por las declaraciones falsas, el magistrado se encuentra en la necesidad de analizar de manera adecuada dichas declaraciones, llevándolo a desarrollar un criterio de valoración exhaustivo y cuidadoso de estas, puesto que, en el supuesto de que no se realice una debida valoración generará un daño moral hacia a la persona vinculada con un hecho delictivo.

Este último aspecto se puede vincular con la condición ética que sirve de base para la construcción de las reglas que describen las acciones que constituyen acción delictiva, ello se muestra como el respaldo de la sanción que pueda en su momento establecerse para la falsedad en la declaración de quien se postula como colaborador eficaz. Esta relación ética se advierte en tanto que “(...) quien opta por ser deshonesto incurrirá en el delito de falsedad genérica si ello causa perjuicio a terceros” (Rios Patios, 2019, pág. 12).

Las condiciones éticas que se trasladan al desarrollo del proceso deben ser controladas por la intervención de los magistrados, para el caso de la colaboración eficaz, será el Fiscal quien genere la pauta de control a fin de advertir al participante en el proceso especial de los posibles efectos de su falsa declaración, desde luego ello en tanto se pudiera establecer este elemento como parte de la descripción punitiva descrita en el artículo 409 del Código Penal.

De acuerdo a ello, las condiciones en las que se desarrolle el proceso especial de colaboración eficaz, tendrán que ver con su propia finalidad, así se establecerán las exigencias necesarias para que la declaración “(...) alcance la naturaleza de verdadero acto de prueba y no agote su valor como simple acto de investigación (Fernández López, 2017, pág. 5); ello implica el vínculo entre la declaración del colaborador y la verdad que, como ya se ha explicado antes, se corresponde con el fin de la prueba que interviene en el proceso penal; siendo así, la finalidad de la participación del colaborador debe exigirse bajo la perspectiva del resultado de veracidad en su declaración, caso contrario, al implicar distorsión de tal fin se encontraría justificada la sanción.

Capítulo III

La aplicación del artículo 409 del Código Penal

3.1. Definición doctrinaria del falso testimonio

El falso testimonio es un concepto central en el derecho penal peruano y en la mayoría de los sistemas legales en el mundo que reprime tal conducta, su definición doctrinaria en el contexto peruano se encuentra en el Código Penal, pero la doctrina y la jurisprudencia también juegan un papel importante en su interpretación y aplicación. Siendo así que, el reconocido jurista chileno Von Bernath (2014), refiere que, “(...) en el mundo de los delitos relacionados con la falsedad, hay un tipo particular llamado delitos de falsedad proposicional, estos delitos se caracterizan porque, en su mayoría, se enfocan en verificar si alguien ha dicho algo que es falso”. (párr. 13)

Si hablamos sobre los delitos de falsedad desde la perspectiva de cómo las personas se expresan verbalmente, nos referimos principalmente a un tipo específico de expresión verbal. Este tipo de expresión corresponde a lo que el sociólogo y filósofo alemán Jürgen Habermas denomina actos de habla constatativos; esto significa que cuando alguien comete delitos de falsedad, generalmente lo hace al decir algo que describe una situación de manera afirmativa, como si fuera cierto. Sin embargo, el problema en estos casos es que lo que están diciendo no es verdadero, y esto se debe a que la persona que lo dice está tratando de hacer creer que es cierto cuando no lo es.

En resumen, se trata de personas que dicen cosas que parecen verdaderas, pero en realidad no lo son, y esto puede ser un problema, especialmente si están tratando de engañar a otros de manera intencionada, especialmente en situaciones legales o importantes.

De lo citado anteriormente, se desprende que, los delitos de falsedad proposicional necesitan ser expresados con palabras y, si los analizamos desde un punto de vista práctico, pueden considerarse como actos de habla en los que alguien está afirmando algo que no es cierto. A diferencia de otros tipos de delitos en los que la falsedad se puede cometer de formas distintas al uso del lenguaje, estos delitos dependen completamente de las palabras.

A modo de ejemplo, es difícil pensar en el falso testimonio sin tener en cuenta lo que alguien está diciendo de manera engañosa, mientras que, en otros tipos de delitos de falsedad, como los de falsedad ideológica, no es tan evidente que se esté utilizando el lenguaje de manera engañosa.
(Wilenmann von Bernath, 2014, párr. 14)

Por otro lado, para el autor Yataco (2018), “(...) el falso testimonio puede tener consecuencias graves en el sistema legal, esto se debe a que cuando alguien miente en un testimonio, puede ralentizar y debilitar la investigación y el proceso de justicia”. (Yataco Hernández, 2018, pág. 5)

Es importante tener en cuenta que las consecuencias del falso testimonio pueden ser tan significativas que incluso podrían poner en peligro la libertad de otras personas que no están involucradas en el caso; es decir, un testimonio falso no solo perjudica la búsqueda de la verdad y la administración de justicia, sino que también puede tener efectos negativos de largo alcance en la vida de terceros inocentes.

Diversos investigadores han anticipado en sus estudios las circunstancias en las que el acuerdo de colaboración podría ser anulado, especialmente si el colaborador proporciona un testimonio que contenga información falsa, ya sea parcial o totalmente. Es así que, Malca Briones (2021), llega a la conclusión que en la actualidad resulta necesario revisar el artículo 409 del Código Penal y ver una posible modificación para castigar a los colaboradores eficaces que proporcionen testimonios falsos. “Esto se debe a que los testimonios incorrectos podrían llevar a juicios erróneos en casos legales importantes, poniendo en peligro la integridad del sistema judicial”. (Malca Briones, 2021, pág. 37). En tal sentido, propone en su investigación que al citado artículo se le adicione: “el colaborador eficaz que brinde un testimonio falso enfrentará una pena de prisión que oscilará entre cuatro y ocho años, además de la revocación de los beneficios otorgados”. (pág. 37)

Por lo tanto, según el referido autor es esencial evaluar la credibilidad de los colaboradores y detectar errores en sus declaraciones para garantizar la

veracidad de la información; pues el testimonio de un colaborador eficaz en un juicio tiene como objetivo proteger el adecuado funcionamiento del sistema judicial para garantizar la protección de los intereses sociales, es decir, investigar los hechos con el fin de aplicar la ley. Sin embargo, para ello es fundamental que estos hechos sean establecidos de manera concluyente a través de medios de prueba, y una de estas pruebas son las declaraciones.

Si consideramos todos los fundamentos antes esbozados, tanto filosóficos como legales, podemos deducir que cuando un testigo o colaborador; previamente el acto de jurar o prometer decir la verdad, queda obligado a posteriormente proporcionar una declaración verídica. Sin embargo, la determinación de si una declaración es veraz o no, según Hilgendorf (1993), “está sujeta a lo que él denomina un criterio de verdad, un concepto que diferencia de la noción misma de verdad”. (pág. 548)

En síntesis, la discusión en torno a este criterio, es decir, lo que permite calificar una declaración como verdadera o falsa en el contexto del delito de falso testimonio, ha sido objeto de debate durante más de un siglo, involucrando la confrontación entre la teoría objetiva y la teoría subjetiva de la falsedad, junto con sus diversas variantes.

3.2. La concepción del perjurio en la teoría jurídica

En primer orden, la concepción del perjurio en la teoría jurídica es un tema fundamental en el ámbito legal, ya que implica la falsificación de la verdad en un contexto judicial o legal. “El perjurio se considera un delito grave en la mayoría de los sistemas jurídicos, ya que socava la integridad del sistema de justicia y puede tener consecuencias significativas en los procedimientos judiciales y en la búsqueda de la verdad” (Solorzano Palomino, 2021, págs. 11-12).

Antiguamente, El perjurio ha sido ampliamente repudiado en el sistema legal basado en el *Common law*. De acuerdo con Agustina & Ortiz de Urbina (2013), “el perjurio es, entre todos los delitos, el más vil y aborrecible” (pág. 183). En el pasado, tanto en el Código de Hammurabi, el Derecho romano y el Derecho medieval francés, “la pena por hacer declaraciones falsas era la muerte; en la colonia de Nueva York, la pena incluso incluía la marca de la letra "P" en la frente del infractor” (pág. 184). En investigaciones contemporáneas, la percepción pública de este delito sigue considerándolo como un crimen extremadamente grave.

Para comprender íntegramente la concepción del perjurio, es importante considerar los elementos clave del perjurio que básicamente incluyen el juramento de decir la verdad, la declaración falsa, la intención de engañar y la relevancia de la declaración falsa para el caso. Por otro lado, las

consecuencias del perjurio pueden incluir sanciones legales, como multas y prisión, así como la pérdida de credibilidad del testigo o la parte que comete perjurio, lo que puede afectar su capacidad para participar en futuros procedimientos legales.

A lo largo de los años se han planteado diversas iniciativas legislativas que buscan la incorporación del delito de perjurio y sus factores agravantes en el Código Penal; “el propósito detrás de estas propuestas es colmar una laguna legal en nuestra legislación que castiga la falsedad en declaraciones hechas ante una autoridad judicial” (Rivero Puente, 2022, pág. 26); y es que, en líneas generales muchos doctrinarios coinciden en la modificatoria del Artículo 409 del Código Penal, ello con el fin de introducir la tipificación del delito de perjurio en nuestro marco legal. Debido a que, hasta la actualidad nuestra normatividad penal se enfoca exclusivamente en regular el delito de falso testimonio en un contexto judicial por parte de testigos, “(...) mientras que la omisión o alteración de la verdad, a pesar de conocerla, no está sujeta a sanción alguna, tratándose simplemente como un proceso administrativo sin consecuencias penales”. (Ibidem, pág. 26)

Desde una perspectiva comparativa, las particularidades de los sistemas legales de cada país han dado lugar a diversos modelos de definición de delitos. Sin embargo, las diferencias observables en estos sistemas son sutiles; razón por la cual, en algunos de ellos, la base para imponer sanciones

parece centrarse en la violación del juramento o promesa de decir la verdad en un juicio, lo que se conoce como perjurio. Mientras que, en otros, la focalización recae en la transgresión del deber de ser veraz al prestar declaración ante un tribunal, es decir, el falso testimonio en sentido estricto; reprimiéndose tal conducta con sanciones severas y ejemplares, por afectar especialmente al bien jurídico protegido, que en este caso es el adecuado funcionamiento del sistema judicial.

En este punto, es necesario precisar que la principal diferencia entre el falso testimonio y el perjurio radica justamente en la formalidad que implica la declaración bajo juramento. Además, algunas disposiciones legales establecen distinciones y sanciones diferentes para las declaraciones falsas proporcionadas a los testigos, independientemente de si han prestado juramento o no, “(...) aunque generalmente se considera una infracción más grave el proporcionar una declaración falsa bajo juramento en comparación con hacerlo sin juramento”. (Rivero Puente, 2022, pág. 22)

Tal cual lo señala el profesor Rojas Aguirre (2022), “(...) la noción de falso testimonio se centra en la idea de realizar una declaración ante la autoridad, mientras que, por su parte el perjurio, en su definición se limita a romper un juramento o una promesa” (pág. 318). En tal sentido pues, el falso testimonio implica una declaración incorrecta, que puede hacerse con o sin juramento, ya sea antes o después; por otro lado, el perjurio implica

necesariamente romper un juramento o no cumplir una promesa, que a su vez puede o no estar relacionada con una declaración, ya sea anterior o posterior.

Finalmente, otra distinción importante entre estos dos delitos radica en que el perjurio ocurre exclusivamente durante un juicio y es más grave debido a que el testigo está obligado a prestar juramento. “En contraste, al falso testimonio que está referido a las declaraciones realizadas a lo largo del proceso y generalmente se considera un delito menos grave, ya que no implica un juramento formal por parte del testigo”. (Alejandre García, 2012, pág. 69)

3.3. Fundamentos y ámbito de aplicación

Antes de poder adentrarnos en los fundamentos punitivos y reconocer el ámbito de protección del artículo 409 del Código Penal, debemos tener en cuenta que este delito tiene sus orígenes en el delito de falso testimonio y del perjurio, que a su vez estas se encuentra enlazadas, la misma que lleva a la búsqueda de criterios que permitan una diferenciación exacta entre estos, asimismo se da el caso de que este vínculo se ha mantenido a lo largo del tiempo, a pesar de los constantes esfuerzos por establecer una diferenciación solo se tiene conceptos muy vagos, tal es así que el concepto de falso testimonio nos da la idea de una declaración falsa prestada ante una autoridad bajo juramento o no, mientras que el perjurio, consiste en mentir o brindar una declaración falsa bajo juramento en un tribunal.

Ahora, ya teniendo un concepto claro de lo que es el falso testimonio y el perjurio, se inicia el análisis del delito de falso testimonio, es preciso señalar que este delito ha tenido presencia en el derecho cuneiforme, en el derecho romano, en el derecho visigodo, en el derecho medieval, incluso en los primeros códigos penales tanto franceses como españoles.

Desarrollando más este punto, se puede considerar que uno de los antecedentes más arraigados con respecto al falso testimonio se halló en las leyes de Hammurabi, que dice “(...) en el caso de que se brinde un falso testimonio y no puede probar la palabra que ha dicho, si el proceso es un proceso capital tal señor será castigado con la muerte”. (Vega, 2018, pág. 3)

Claramente ya se puede apreciar que, en dicha época, ya se tenía cierta regulación en cuanto al delito de Falso Testimonio, asimismo se establecieron ciertos criterios que hasta en la actualidad se han mantenido vigente, siendo uno de ellos “(...) el castigo de dicha conducta depende del asunto a propósito del cual se presta el testimonio mendaz”. (Vega, 2018, pág. 3)

En cuanto al del delito de falso testimonio, algunos autores han tratado de formular en base a la naturaleza del delito, ciertas diferenciaciones, es así que se entiende en este caso al falso testimonio “(...) como delito contra los medios de prueba, íntimamente emparentado con los de falsedad y la de

quienes le conciben como específico delito contra la Administración de justicia”. (Hernandez Guijaro , 1967, pág. 4)

Gran parte de la doctrina ha señalado que el bien jurídico protegido en el delito de falso testimonio es el correcto o normal funcionamiento de la administración pública, aspecto de protección que se debe analizar en tanto que el derecho garantizado asuma condiciones relacionadas con la investigación penal, ello partiendo de la idea que se trata de un proceso dentro de la administración pública del sector justicia. Luego de ello se podrá atribuir condiciones de responsabilidad de estos sujetos intervinientes para justificar la persecución de la falsedad de las declaraciones.

Al respecto MANZINI, lo hace referencia a que el objeto de los delitos contra la administración pública en este caso el delito de falso testimonio afirma “(...) que el genérico está integrado por los intereses concernientes al normal y eficaz funcionamiento de la actividad judicial, el respeto a la autoridad de la decisión y la sujeción de los particulares a la Jurisdicción”. (Hernandez Guijaro , 1967, pág. 11)

Aunado a ello, es preciso mencionar que en el delito de falso testimonio, se señala una falsedad con el motivo de utilizar este medio para desviar la justicia y el criterio de valor del magistrado, asimismo se debe tener en cuenta que la doctrina hace referencia a la protección de la función

jurisdiccional del Estado que se va a plasmar en el proceso y lo ya mencionado anteriormente que es el normal funcionamiento de la administración pública; esto tampoco asegura que si hay un correcto funcionamiento de la administración de justicia, las decisiones que se tomen van a dejar de ser injustas, sino que al menos se tendrá en consideración el determinar mediante criterios de valor la pureza de la prueba o de las declaraciones. Es preciso señalar que estas personas que participan en un juicio, tendrán la obligación de esclarecer y decir la verdad, en caso de incurrir en falsedad en sus testimonios, desvirtuara la adecuada actividad jurisdiccional, es por eso por lo que la judicatura debe tener mucha cautela para no incurrir en una sentencia injusta, teniendo en cuenta que en la actualidad es un peligro latente.

Capítulo IV

Análisis y resultados de la investigación

La fase de análisis se ha estructurado en función a lo que ordena la meta específica referida al análisis de la existencia de acuerdos de colaboración eficaz revocados en los procesos contemplados en su ley, para lo cual se ha recurrido a las instancias judiciales correspondientes a fin de acceder a los procesos penales instaurados en los que se haya generado la colaboración eficaz como procedimiento especial. El resultado de tal gestión no ha sido satisfactorio para la investigación, dado que la institución judicial maneja estos casos bajo el principio de reserva del proceso penal debido a su naturaleza.

Es por tal razón que se ha recurrido a la información mediática sobre este tipo de procesos a fin de reconocer la presencia de circunstancias coincidentes con el planteamiento de esta tesis; es decir, declaraciones de parte de los colaboradores eficaces que no se hayan ajustado a la verdad, razón por la cual se les ha retirado la posibilidad de beneficio.

Además de este aspecto se observa como resultado del análisis la evaluación de la Ley de Colaboración eficaz en función a la existencia de sanciones que se ocupan de la falsa declaración en la que incurriría el

colaborador; esto se ha comparado con el antecedente normativo respecto a este tipo de conductas que se identifican como actos delictivos, en tanto que la falsa declaración se asume como un ilícito sancionable en el Derecho Penal.

4.1. Resultados del análisis de información mediática sobre la existencia de colaboradores eficaces que han declarado falsamente

Tabla 1: Evaluación de los casos judiciales con la participación de colaboración eficaz y la declaración falsa.

Origen	Caso	Análisis
1. Diario La República	Cuellos Blancos del Puerto	<p>Se aprecia de la información mediática que el colaborador eficaz Walter Ríos ha sido encausado por el Ministerio Público por una presunta denuncia calumniosa, así como por encubrimiento personal.</p> <p>Se indica que la falsedad estaría en razón de que se le atribuye responsabilidad al letrado Castillo Alva respecto de los hechos ilícitos por los que esta denunciado Cavassa Roncalla.</p> <p>Este tipo de presunción surge en medio del acuerdo de</p>

		<p>colaboración eficaz suscrito entre el denunciado y la Fiscalía Suprema, con lo cual Walter Ríos tendría una sanción reducida de 12 años con privación de libertad bajo la condición de otorgar datos de cuarenta actos de crimen organizado.</p> <p>Se evidencia la falsedad de las declaraciones en tanto que no han sido corroboradas respecto a la declaración de los testigos participantes en el proceso, puesto que niegan la participación de los personajes que, a través de la declaración del colaborador, estarían inmersos en el hecho delictivo (Cuellos Blancos: fiscal investiga a Walter Rios por mentir en colaboración eficaz, 2022).</p>
--	--	--

<p>2. Panamericana Televisión- 24 horas</p>	<p>Marka Group</p>	<p>Se hace referencia a la declaración falsa que ha generado la investigada Sada Goray, en el caso Marka Group, quien otorgó información que no se ajusta a la realidad, en tanto que al momento de su corroboración no alcanza a coincidir con lo declarado por los otros colaboradores que participaban en el proceso penal. Sobre esta apreciación en el contenido de la publicación emitida por el diario La República, se verifica la postura del Ministerio Público representado por el Fiscal Christian Niño Torres, no aceptó en razón de las mentiras y ocultamiento de información de manera directa, es así que emitió la resolución correspondiente respecto al comportamiento de la colaboradora que tendría</p>
---	--------------------	---

		información que no resulta relevante ni eficaz, denotándose falsedad y la voluntaria omisión de datos relevantes.
--	--	---

4.2. Comparación del contenido normativo

Según lo que se ha explicado en la primera parte de este capítulo, la observación de la realidad que justifique la incorporación de sanción al colaborador eficaz que incurra en falsa declaración, dependerá del resultado de la comparación entre las reglas de colaboración eficaz y el artículo 409 del Código Penal.

Tabla 2: cuadro analítico de la Ley de Colaboración Eficaz respecto a los efectos jurídicos contra el colaborador que declara falsamente

Ley de colaboración eficaz (Decreto Supremo N° 007-2017-JUS)	Análisis
<p>1. Repercusiones contra el colaborador:</p> <p>Revocatoria del acuerdo (Art. 36 -37), por</p> <ul style="list-style-type: none"> - Información no resulta útil - Falta de corroboración de la información - Falsedad de información. 	<p>El efecto que se advierte de la Ley de colaboración eficaz sobre la condición del colaborador respecto al acuerdo es que sea revocado ante tres circunstancias, siendo la más importante para este análisis, el hecho de</p>

	<p>que se produzca por falsa declaración.</p> <p>La acción que asume la Ley de Colaboración Eficaz sobre esta circunstancia no se aprecia como proporcional con el efecto de la falsa declaración, puesto que intervienen intereses particulares que son trastocados con este tipo de declaración.</p>
<p>2. Efectos de la denegatoria del acuerdo (artículo 25):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iniciar cargos contra los sindicados (colaborador) - Comunicación a los terceros denunciados - Autoincriminación del colaborador se considera como inexistente <p>Perdida de beneficios</p>	<p>Además de la condición descrita, se puede identificar en otra parte de la Ley analizada que existe la intención de accionar en contra del colaborador que declaró falsamente, ya que, por la denegatoria del acuerdo, señala que se han de iniciar cargos en su contra, pero no realiza especificaciones sobre cómo</p>

	se habrá de producir, ni tampoco el ilícito que se adecue para la imputación respectiva.
--	--

Tabla 3: análisis normativo del artículo 409 del Código Penal

Artículo 409 del Código Penal	Análisis
1. “El testigo, perito, traductor o interprete que en un procedimiento judicial hace falsa declaración sobre los hechos de la causa o emite dictamen, traducción o interpretación falsos”,	Esta primera parte del artículo se refiere a los sujetos que son los agentes de la acción delictiva, elemento importante en tanto que permite reconocer su función o cualidad al participar en el procedimiento judicial. De tal descripción se recoge el aspecto que vincula al testigo con la falsa declaración con los hechos de la causa, lo cual se puede vincular al colaborador eficaz con la condición de testigo y su declaración con la posibilidad

	de que pueda alcanzar la característica de falsedad.
2. “(...) será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años”.	La sanción que se gradúa para este tipo de acción ilícita se percibe bajo la característica de una pena suspendida en su ejecución, toda vez que no supera los cuatro años. Esta condición tendría que evaluarse frente a la necesidad de que la sanción sea efectiva al momento de aplicarse contra el colaborador eficaz que declara falsamente, circunstancia en la que el efecto de esta sanción constituya una agravante, que como resultado de allá se incremente el cálculo de la pena en un tercio.

3. “El Juez puede (...) eximir de sanción si el agente rectifica espontáneamente su falsa declaración antes de ocasionar perjuicio.	Esta parte del tipo describe una condición de arrepentimiento, que sin duda haciendo uso del principio de oportunidad, se puede eximir de la pena si es que el colaborador eficaz antes de la corroboración desiste de su declaración y evita la vulneración de la inocencia de los sujetos afectados por la delación.
---	--

Fuente: Creación propia en base al contenido de las reglas observadas.

OBSERVACION:

La revisión de las normas que forman parte de esta investigación ha permitido reconocer un nivel de coincidencia en tanto a los contenidos normativos en tanto que se procura la protección del sistema de justicia ante la participación de sujetos que aportan declaraciones al esquema de investigación, para el caso de la colaboración eficaz, esta proyección se observa en su propia ley, por lo mismo que resulta adecuado cuestionar: ¿Qué criterios de análisis vinculan la colaboración eficaz con la descripción del tipo penal en el artículo 409?

Los criterios de análisis se muestran en dos sentidos, el primero la necesidad de control que debería generar el Estado a través de la sanción ante el incumplimiento del carácter de veracidad de la declaración del colaborador, y segundo la necesidad de efectivizar la persecución que debe propiciar el sentido normativo del artículo 25 de la Ley de Colaboración Eficaz. Son precisamente estos dos elementos los cuales permiten vincular la última Ley mencionada y el ámbito de sanción que corresponde al artículo 409 del Código Penal.

Es importante considerar la existencia de aspectos negativos que se aprecian de la sanción que incorpora el artículo 409 del Código Penal, lo cual debe mostrarse con la intención de fortalecer la propuesta de un cambio normativo que agregue esta condición de control, por lo cual se hace necesaria la interrogante de ¿Qué criterios imposibilitan la aplicación del artículo 409 al colaborador eficaz que declara falsamente?

Más allá de la posibilidad de aplicar el artículo 409 en puridad sobre las acciones de la falsedad de la declaración del colaborador eficaz, resulta necesaria la materialización del carácter persecutor que se plantea en la Ley de Colaboración Eficaz ante la falsa declaración; esto quiere decir que si se sugiriese la aplicación de la sanción de manera directa en una incorporación o ampliación normativa del artículo 409, se estaría invadiendo la acción de control que le corresponde a la Ley de Colaboración Eficaz, lo cual no resulta

congruente con el aspecto sistemático que debe regir el ordenamiento, es por esta razón que se plantea un acondicionamiento de la Colaboración Eficaz a fin de que se produzca un cambio que sustente la aplicación del contenido normativo del artículo 409 para lograr imputar al colaborador que declaro falsamente, todo ello justificado en la lesión que se produce no solo a los particulares afectados por la declaración sino también para garantizar la protección del sistema de justicia en su administración.

Capítulo V

Contrastación de la hipótesis

5.1. Discusión de los resultados

5.1.1. Discusión sobre el objetivo específico: “Desarrollar doctrinariamente los fundamentos para la sanción por falsa declaración a fin de reconocer su viabilidad en la ley de colaboración eficaz”

Malca (2021) ¿Qué tan necesario resulta incorporar una sanción por la declaración falsa del colaborador eficaz en el ordenamiento jurídico penal? En el marco normativo que ordena la estructura del procedimiento especial destinado a la atención de los colaboradores eficaces dentro de un proceso penal, se puede apreciar una condición de credibilidad aplicada sobre el colaborador en función a los medios probatorios que ofrece. Pese a tal condición la mecánica de valoración de los medios no siempre resulta acertada, por lo que este filtro permitiría la configuración de una teoría del caso en la que se incorporan nuevos agentes en virtud de un acto declarativo.

Esta particular actividad jurisdiccional tiene efectos que son trascendentales en el ámbito de la investigación, en tanto que producen alteraciones en el espacio de derechos que le corresponde a quien se imputa como partícipe en la organización criminal, esto último en razón de las declaraciones del colaborador, lo cual va acompañado del riesgo lesivo, es

decir que si no es posible controlar este tipo de acción, se estaría poniendo en riesgo o vulnerando las garantías que le corresponden al imputado.

Como se puede apreciar, la condición particular en la que se posiciona el imputado en razón de la delación del colaborador eficaz debe ser controlada de una manera más efectiva, dado que si la declaración del colaborador resultare falsa deberán tomarse las medidas pertinentes para evitar la vulneración de derechos. Por lo mismo que se presenta esta realidad como una situación social generada por la propia estructura del derecho penal, lo cual representa necesidad, tanto de control, como de administración del poder y el manejo de pruebas.

Robles (2019) ¿cuál es el aporte de la epistemología desarrollada sobre la corroboración de la información en los acuerdos de la colaboración eficaz? Si bien es cierto que la verificación teórica en torno a la importancia que debe tener la corroboración de la información brindada, resulta de utilidad, no es suficiente con dicha comprensión sobre la veracidad de los aportes que conducen al acuerdo por colaboración eficaz, ello en tanto que hace falta un lineamiento de control efectivo, lo cual se puede lograr a través de la intervención adecuada del Ministerio Público, para que no sólo sea una cuestión de control sino que también se conduzca como la opción para reconocer los elementos del tipo penal contemplado en el artículo 409 del Código Penal.

Tal cual se está indicando, el tema pasa por un orden que pretende establecer el control adecuado de los mecanismos que se hacen participar en la investigación, tal es el caso que este control sugerido tendría que ser desarrollado únicamente por quien recopila la data y la maneja; ello no resulta del todo suficiente, en tanto que las actividades fiscales tendrían un más alto nivel de verificación si es que se orienta hacia la intervención de un tercero, lo cual permitiría un mayor alcance de protección respecto de la víctima.

Para el caso de la evaluación dogmática del problema, se observa también un resultado similar al anterior, dadas las carencias en la determinación, ello en tanto que la condición de garantías es una característica esencial del propio proceso penal, por lo cual se le atribuye el adjetivo de garantista, no siendo suficiente con esta catalogación, hace falta que se verifiquen los resultados obtenidos en función a la realidad jurisdiccional, es decir importa conocer con certeza si es que la acción desarrollada dentro del proceso toma medios probatorios fuera del marco de la legalidad, ello a fin de evitar el abuso de estos mecanismos; es así necesario establecer el control antes indicado aunado al que ahora se revisa, que dependerá de un carácter material antes que subjetivo.

Como se aprecia la corroboración de los planteamientos que surgen en el acuerdo de colaboración eficaz, depende de la forma en que actúa y el

criterio que adopta el magistrado representante del Ministerio Público, donde es sabido que participan cuando menos tres modos de formar dicho criterio, el primero que se ocupa de la aplicación normativa sin más luces que la interpretación exegética o literal, al aspecto interpretativo y finalmente el criterio en función a las máximas de la experiencia, esto último es el aspecto más subjetivo de toda la cultura jurídica. Por lo mismo que resulta de mucha importancia la acción de corroboración, pero en el aspecto subjetivo que pueda alcanzar el criterio de quien evalúa, lo cual se verifica como una tarea difícil de lograr ya que los controles son netamente objetivos, incluso en el campo de las garantías, sumado a tal dificultad, el hecho de que las bases de este control son normativas, lo cual implica mayor objetividad.

Rey (2019) ¿qué efecto tienen las falsas declaraciones como regla en el proceso penal? Para poder hablar de un efecto de este tipo de procesos respecto a la participación de un sujeto haciendo uso de una falsa declaración, será preciso realizar una observación de la realidad con la intención de advertir este tipo de acciones lesivas al propio ordenamiento jurídico. Esto último indicado es importante para saber la vigencia de este tipo de acciones, vale decir de si es que existe un nivel adecuado de incidencia a fin de justificar la existencia de este tipo penal.

Es importante para todo ello que se logre la verificación previa de lo que se postula, puesto que una vez que como efecto de tal declaración se produzcan restricciones de los derechos de quienes resultaren afectados, no

habrá vuelta atrás, ello en tanto la lesión de los derechos que le corresponde a un ciudadano. Esta evaluación adecuada, es lo que da un carácter de certeza sobre lo postulado, no se procura la distribución de datos, por lo mismo que corresponde como característica a este tipo de acción, que sea lo suficientemente veraz para lograr el convencimiento del magistrado.

Alzamora y Barboza (2022) ¿Cómo se puede corroborar el vínculo negativo que existiría entre el testimonio del aspirante a colaboración eficaz con la prisión preventiva? Desde luego que el vínculo existe en razón de su propia naturaleza, puesto que la data que se plasme en dicha declaración tendrá el aporte necesario para que quien lo evalúe asuma con certeza si es que correspondería aplicar la medida cautelar en base a los elementos preexistentes.

La importancia que pretende señalar la tesis citada se percibe como algo ya existente, puesto que como se ha indicado en el párrafo anterior, se trata de un vínculo relacional dependiente; por lo mismo que, no se aprecia un verdadero aporte en función a la realidad jurisdiccional, es decir se trataría de una mera descripción de ello.

En ese sentido el camino correcto para este tipo de evaluación habría sido reconocer la existencia de un vínculo negativo entre el testimonio y la aplicación de la prisión preventiva, lo que implica la existencia de falsedad en dicha declaración, lo que conlleva a una determinación incorrecta de la

prisión preventiva. Esta acción se percibe como daño sobre la persona que resulta acusada por el testimonio, es posible que en esta fase tendría cabida la sanción de la que trata esta tesis, puesto que se altera la certeza en función a un testimonio viciado.

¿Cuál es el propósito fundamental de imponer sanciones penales a quienes emiten declaraciones falsas en juicio?

Teniendo en cuenta que la estructura del ordenamiento jurídico se organiza con la intención de establecer un orden, es decir que el Estado pueda a través de él dirigir adecuadamente el control social para el cual se ha destinado. En el caso del ámbito penal se entiende tal estructura destinada a la aplicación de sanciones con el fin de salvaguardar la vigencia del propio ordenamiento jurídico; esto significa que la compilación de tipos penales en un solo cuerpo legal corresponde a una porción de la administración de justicia, en tanto que señala de manera puntual los parámetros a seguir para tal fin.

El campo penal traslada la obligación estatal para cuidar o garantizar el bienestar de los ciudadanos hacia el sistema de justicia a fin de que se ocupe de las acciones que van en contra del ordenamiento, así el derecho penal como regla se comprende en función al conjunto de tipos penales que se encargan de la descripción de acciones o conductas que salen del marco de lo permitido en la sociedad. Esto implica que la acción penal se basa en el reproche social que autoriza al Estado para aplicación de sanciones según cada tipo penal.

Los tipos penales incorporan una serie de elementos que conllevan a la viabilidad jurídica para aplicar una sanción, toda vez que se entiende a esta última como una restricción de derechos, lo que precisa de una justificación adecuada a fin de no alterar el sentido de protección que otorgan los principios penales. Es así que se encuentra la condición más característica de la construcción de un tipo penal, como es el caso del bien jurídico que se pretende respaldar ante la acción ilícita de los ciudadanos o de hasta las autoridades o representantes del poder.

La determinación de los bienes jurídicos como ya se ha explicado antes se establecen o reconocen en función al derecho que pretenden proteger, puesto que se trata de una selección de ellos que permita un adecuado control del sistema de justicia y su intervención. En suma, los bienes jurídicos son figuras representativas de las garantías del ordenamiento jurídico penal y como tal pretenden la verificación del contexto conductual para así establecer una sanción.

Para el caso de la sanción por falsa declaración en juicio, según el espacio que ocupa dicho tipo penal en la estructura del ordenamiento jurídico, estaría destinado a proteger la correcta administración de justicia. Es sobre este aspecto que la evaluación de los efectos o la intención del legislador pasa por el campo de la propia investigación que se encarga finalmente de

establecer la verdad con la intención de reconocer el nivel de responsabilidad penal.

El caso de la administración de justicia se presentan condiciones específicas, que como tal la justicia encuentra diseñada en un marco de percepciones filosóficas y que se orientan hacia la consecuencia de equidad en tanto que muestra un camino hacia el reconocimiento de los derechos a quien le corresponde, siendo además la justicia otro elemento que permite reconocer tales derechos en función a la determinación judicial de los mismos, lo cual se acompaña del concepto de verdad que consolida el fin del derecho penal y su proceso.

Por todo lo señalado, es prudente sugerir cambios que orienten a la administración de justicia sobre los límites existentes en la realidad jurídica, así como la fáctica para establecer un rango de tratamiento igualitario, puesto que la ventaja que tiene el que declara es que sus términos van a ser adecuados para un determinado sector en tanto se asuman como verdad.

¿Qué equilibrio debe haber entre la búsqueda de la verdad y la imposición de sanciones, el cual se da durante la colaboración eficaz y la aplicación del artículo 409 del Código Penal?

El diseño de la investigación según el modelo procesal penal peruano implica el desarrollo de actividades por parte del titular de la acción penal destinadas a la búsqueda de la verdad respecto de los hechos materia de la

investigación, en dicha tarea la representación del Estado a cargo de los fiscales puede llegar a un entendimiento herrado en lo que respecta a la titularidad de la acción penal, que no debe estar dirigida hacia la imputación exigida en todo proceso de investigación, puesto que el timón de sus actividades no deba ser únicamente la imposición de sanciones, sino el establecimiento de la verdad sobre los hechos a fin de reconocer luego la exigencia de aplicar una sanción.

Además de ello, la imposición de una pena en el ámbito del sistema de justicia acarrea restricción de derechos, por lo que ha de tenerse el exclusivo cuidado de no cometer errores en la administración de justicia. Es este último campo en el que se advierte la presencia o posibilidad de que se den las declaraciones falsas en el juicio, sobre ello puede señalarse que tienen un efecto de variación de la tarea encaminada a buscar la verdad.

Lo último señalado, muestra un espacio de armonía que debe darse entre la acción del Ministerio Público y la consecuencia de restricción de derechos lo cual debe estar plenamente justificado, es así que las acciones tomadas deban orientarse a una sanción únicamente en tanto la verdad así lo amerite. Conviene dejar en claro que todo cuestionamiento de la situación de licitud de las acciones investigadas se debe basar en una adecuada motivación de las causas que permitan aplicar la sanción. Esto es que no solo bastará con

que se contemple la sanción en el tipo penal, sino que del examen de la realidad aparezca como posibilidad la sanción.

¿Cuáles son las implicaciones éticas y legales de aplicar sanciones por declaración falsa en el contexto del proceso penal?

Al momento en que se hace referencia a condiciones éticas para comprender la creación de un tipo penal salta a la idea el razonamiento jurídico penal, de que lo que se ha de sancionar son las conductas de los ciudadanos, mas no el campo del pensamiento o condiciones tan abstractas como la moral y la ética. Para estos últimos campos se tiene al derecho administrativo para ocuparse de este tipo de problemas relacionados con elementos subjetivos.

En tal sentido, la configuración de los tipos penales como es el caso del artículo 409 del ordenamiento jurídico penal, tiene como característica la aplicación de una sanción basada en el campo del bien jurídico de la correcta administración de justicia. En este campo se tiene una concepción general sobre lo que ha de entenderse como ético, vale decir que si bien es cierto no se sanciona por la forma de pensar sobre las condiciones éticas, más si resulta necesario evaluar las consecuencias conductuales de este tipo de pensamiento.

Por lo señalado puede advertirse que existe un vínculo entre la cuestión ética y la declaración que se produce en el juicio de una investigación penal, así pues, no se trata de una manifestación directa entre la cuestión ética como pensamiento y la ejecución de acciones que van en contra del ordenamiento jurídico penal. Siendo este enlace lo que permite ejercer un control de legalidad sobre la aplicación de esta sanción sobre la falsedad de la declaración en juicio.

Solamente puede advertirse entonces que, la forma en que se está produciendo la aplicación de sanciones en el rubro del 409 del Código penal, resulta medianamente apropiada, toda vez que no se tiene el cuidado específico de si corresponde o no a una acción netamente lesiva, se trata más bien de asegurar el bienestar del sistema de justicia, que precisa de una correcta administración y la configuración de elementos que permiten una aplicación adecuada.

TOMA DE POSTURA:

Luego de haber desarrollado doctrinariamente los fundamentos para la sanción por falsa declaración a fin de reconocer su viabilidad en la ley de colaboración eficaz se han podido identificar que la imposición de sanciones por declaraciones falsas en el proceso penal resultaría necesaria para proteger la administración de justicia, salvaguardar los derechos de los imputados y el mantenimiento de un equilibrio entre la búsqueda de la verdad y la imposición

de sanciones. Sin embargo, esta aplicación debe realizarse de manera ética y legal, ya que contribuiría a garantizar un sistema de justicia equitativo y justo para todas las partes involucradas fortaleciendo así la confianza en el sistema legal, promoviendo la justicia y la verdad en la sociedad.

5.1.2. Discusión sobre el objetivo específico: “Observar los fundamentos punitivos que justifican la aplicación del artículo 409 del CP, para reconocer su ámbito de protección”

El control del derecho penal tiene su origen en la tarea del Estado para establecer un control social, en esta vertiente está la seguridad ciudadana como parte de las garantías que se deben ofrecer para garantizar un normal desarrollo social en armonía. Sobre ello es que se rige la necesidad de establecer un sistema de justicia acondicionado para alcanzar las metas de justicia y equidad, con lo que se vincula directamente la veracidad de las declaraciones que se vierten en el desarrollo de un determinado proceso.

Esta condición especial del sistema de justicia para mantenerse como tal requiere de elementos puntuales como las tipologías penales que, ante la advertencia de este tipo de acciones de falsedad como es el caso de las declaraciones, se pueda recurrir a la atribución de una sanción. Es así como se constituyen los tipos penales que describen la característica de falsedad en

las declaraciones a lo que la doctrina indica como delitos de falsedad proposicional, mediante tal descripción se orienta el análisis de la judicatura sobre la condición de verdad o falsedad de las declaraciones.

Más allá del concepto de la falsedad o verdad de una expresión del común de los seres humanos, importa más bien el sentido de trascendencia que puede adoptar este tipo de acciones o declaraciones imbuidas de falsedad, todo ello requiere de una evaluación adecuada por lo que surge el cuestionamiento de ¿Qué factor sería el más adecuado para calificar una declaración como verdadera o falsa en el contexto del delito de falso testimonio?

En el análisis de estas circunstancias siempre se considerará que el acto de falsedad produce un efecto directo sobre la situación de un bien determinado, en tanto que el derecho penal busca el control de cumplimiento del ordenamiento jurídico mediante las acciones que condicionan un resultado de lesión. Entonces el primer factor que se habría de considerar para reconocer la existencia de un ilícito sería precisamente el nivel de lesión sobre el bien que se protege, para este caso sería la correcta administración de justicia.

El reconocimiento de la falsedad de una declaración además de verificarse como tal debe sustancialmente producir un efecto negativo, que

como ya lo indicado antes se vincula con el bien jurídico, pero además debería contemplar un efecto de vulneración de derechos, esto implica que la afectación debería estar reflejado sobre los intereses de otras personas, sujetos de derecho que son perjudicados por el carácter falso de la declaración, tal es el caso que se produce una prisión preventiva en razón de una falsa imputación.

El problema está en que existirán diferentes maneras de interpretar la existencia de este fenómeno en la realidad, por lo mismo que hace falta consolidar un protocolo de acción a fin de que el Estado a través del órgano de poder judicial verifique los niveles de perjuicio de manera adecuada y en función de ello se planteen las sanciones adecuadas. Para el caso de la falsedad genérica existen parámetros bastante marcados, la carencia más se identifica en el nivel de verificación de falsedad en los actos declarativos, esto es que las proposiciones deban ser analizadas correctamente.

La condición antes planteada conlleva a la verificación del principio de proporcionalidad, por lo mismo que se cuestiona ¿Qué tan suficiente es la pena prevista en el artículo 409 para disuadir a los colaboradores eficaces de declarar falsamente?, en efecto la condición proporcional de las sanciones va a depender del resultado que se haya generado respecto al nivel de lesividad, ello en tanto que representa la base de la atribución de responsabilidad sobre

el ilícito. Se entiende que la lesión debe ser la ruta que siga aquella potestad punitiva que tiene el Estado para sancionar un ilícito.

Lo que se entiende por lesión es aquellos efectos negativos que se producen sobre los objetos que protege el derecho penal a través del diseño tipológico existente en el Código Penal, lo cual implica que esta lesión debe ser el marcador de una sanción, la misma que debe responder a la característica de proporcionalidad, esto es que sea el mismo nivel de afectación que produce la sanción respecto del daño que se ha generado sobre el bien protegido.

Es en virtud a ello y según lo ya analizado del artículo que sanciona la falsa declaración, que no se aprecia un tenor de equidad fácilmente demostrable, ello en tanto que existe dificultad para señalar de manera concreta el nivel de la lesión que se ha producido sobre el bien que representa un tipo de administración. Cabe hacer aquella precisión, puesto que, la determinación de la lesión estará en manos de quien administra justicia, así los niveles de sanción van a graduarse en virtud de tal juicio de valor; lo que solo tendrá un límite que es la propia sanción establecida en la norma.

Situación muy complicada de establecer en tanto que la lesividad de elementos ideales como lo es la administración no resulta del todo factible para que produzca un resultado objetivo o medible en cifras que representen

una sanción suficiente; esto quiere decir que se vuelve a la idea del juicio de valor, que en razón más orientada hacia la moralidad o la ética es que se precisa una sanción típica, esto en la construcción del artículo citado.

TOMA DE POSTURA.

La aplicación del artículo 409 del Código Penal, representa un instrumento esencial en la preservación de la integridad del sistema de justicia. Sin embargo, su aplicación se encuentra ligado a la evaluación de la lesión y la proporcionalidad de las sanciones impuestas. Ahora la complejidad para determinar estas, nos lleva a contar con pautas claras y precisas que guíen el ejercicio de esta potestad punitiva. Entonces, solo a través de una ponderación meticulosa de los intereses en juego y una interpretación equitativa de la norma, se logrará mantener la confianza de la sociedad en el sistema de justicia y la legitimidad del control que ejerce el estado en el ámbito del Derecho Penal.

5.1.3. Discusión sobre el objetivo específico: “Analizar la incidencia de acuerdos de colaboración eficaz revocados en los procesos contemplados en su ley”

Dadas las características de este tipo de procesos se tiene como uno de los principales límites al desarrollo de esta tesis en cuanto a la observación de la realidad, el hecho de que se trata de casos sujetos a reserva de la

información, puesto que la figura de la colaboración eficaz en tanto el proceso especial requiere de esta peculiaridad, ello con el fin de salvaguardar los intereses de quienes se postulan como tal, por una cuestión de seguridad para quien se ha de convertir en el delator de la organización criminal.

Para superar este obstáculo se ha tenido como posibilidad la evaluación de los casos mediatizados por la prensa en que se ha podido apreciar la condición de falsa declaración, esta peculiar atención de los casos en los que se presentan declaraciones que no han podido ser corroboradas o que luego de haberse producido como efecto negativo sobre el derecho de libertad de las personas encausadas por la declaración, es aclarado mediante la investigación del Ministerio Público, consolidándose un efecto de vulneración de derechos en virtud de la falsa declaración que sin duda se produjo con la intención de alcanzar el beneficio sobre la sanción.

Este último aspecto es el más relevante en la observación realizada, puesto que los casos en los que se más se produce este tipo de acción negativa es en los de corrupción de funcionarios o crimen organizado, la cualidad de los sujetos es lo que permite que se produzca este tipo posibilidad de engaño en el desarrollo de la colaboración eficaz. Es posible que la condición de exigencia sobre la veracidad no sea lo suficientemente eficaz para alcanzar una correcta evaluación de la declaración, es posible también que se estaría

produciendo un tema de ineficiencia de parte de los operadores de justicia que se encuentran a cargo de la investigación penal en su etapa inicial.

Teniendo en cuenta, el sentido del análisis que, en primer lugar se ocupa de la verificación en la realidad de que esta circunstancia de falsa declaración en el ámbito de la colaboración eficaz se produzca, y que en segundo lugar se refiere a la incidencia, se puede indicar que de acuerdo a lo reseñado en la evaluación de casos mediatizados, corresponde establecer un criterio de incidencia frecuente, puesto que los casos más populares, por decirlo de alguna manera, en la persecución como control ante la corrupción de funcionarios o el crimen organizado, permite ver que se produce con la intención de lograr el beneficio de reducción de la sanción u otros que se deriven como premio por la delación producida necesariamente para cumplir con la condición de colaborador eficaz.

El aspecto más trascendente de la investigación desarrollada se encuentra en la observación normativa que se plantea sobre el contenido de las normas que forman parte del análisis, esto es sobre la Ley de Colaboración Eficaz, así como sobre la estructura penal del tipo contenido en el artículo 409 del Código Penal. El resultado de esta evaluación ha dado luces más precisas sobre la posibilidad jurídica de tomar el contenido normativo del artículo 409 del ordenamiento sustantivo penal para suplir la ausencia de indicación sancionadora del artículo 25 de la Ley de Colaboración eficaz, puesto que

solamente se indica “Iniciar cargos contra los sindicatos”, esto es que no se redacta con precisión, ni el tipo ni la sanción aplicable.

Toma de postura

De acuerdo al análisis de la incidencia de los acuerdos de colaboración eficaz con falsa declaración que se han producido en el ámbito jurídico nacional, se puede apreciar que las incidencias más relevantes en las que se ha dado las falsas declaraciones son en los casos de corrupción de funcionarios o crimen organizado, por lo que, se sugiere en esta investigación que la condición de exigencia de la veracidad de la información puede no ser suficientemente eficaz para garantizar la correcta evaluación de declaraciones, es por ello, que se propone que exista un equilibrio de protección de los colaboradores, la necesidad de transparencia y veracidad en los procesos de colaboración eficaz, asimismo, se pueda establecer una sanción a aquellos colaboradores eficaces que declaren falsamente con el fin de que se evite un uso indiscriminado de esta figura con el fin de obtener beneficios premiales, sin importarles el perjuicio que puedan generar a terceras personas.

5.2. Validación de las variables

En vinculación al diseño de la contrastación de la hipótesis luego de la discusión de cada uno de los resultados obtenidos en la observación realizada por la tesis, se presentan las posturas asumidas en función al orden de las variables, ello con el fin de ubicar el sentido que valida aquel concepto de cada una de ellas. Esta explicación del sentido de las variables permitirá definir un razonamiento final de cada una de ellas que luego de su unión tal cual el ejercicio de la hipótesis inicial permitirá la creación de la determinación final de la tesis que luego permitirá la contrastación.

5.2.1. Validación de la variable independiente: “La sanción por falsa declaración en la ley de colaboración eficaz”

Deberá tenerse en cuenta el sentido de la variable independiente, en tanto que se consolida como el concepto que define o describe el origen del problema que identifica la investigación, es decir ubica la vinculación entre la oportunidad que ofrece la colaboración eficaz y la existencia de una declaración con características de falsedad. Es por ello que se ha tenido en cuenta la postura que se obtiene del primer objetivo específico dada su vinculación con esta variable.

De acuerdo con ello es que se logra reconocer del contenido doctrinario la existencia de fundamentos para la sanción por falsa declaración, los cuales forman la base teórica que permiten ubicar la viabilidad o

posibilidad de aplicar en el campo de la ley de colaboración eficaz. Esta postura se condiciona la existencia de una necesidad que se concibe como la imposición de sanciones por declaraciones falsas en el proceso penal, acción que debe generarse con el fin de proteger la administración de justicia, salvaguardar los derechos de los imputados y el mantenimiento de un equilibrio entre la búsqueda de la verdad y la imposición de sanciones.

Como tal la existencia de la condición sancionadora requiere de la participación del agente en la lesión, esto es la falsa declaración que según lo que se advierte de la intención del legislador tiene un enlace directo con la restricción del acuerdo de beneficios, el mismo que resulta revocado y con ello el resultado de la persecución penal que se debiera instaurar, mas no se indica en la regulación de la colaboración eficaz, con precisión el modo de sanción ni menos el tipo de sanción a consignar.

Es importante considerar la correcta aplicación de las sanciones, por lo mismo que la pauta punitiva debe ser la que proporcione el enlace con la legalidad como principio, que para el caso de la acción del colaborador que produce lesión con la falsa declaración se debe observar desde la perspectiva de que se encuentra en un espacio de discusión sobre un delito previo el cual se le imputa. Sin embargo, esta aplicación debe realizarse de manera ética y legal, ya que contribuiría a garantizar un sistema de justicia equitativo y justo

para todas las partes involucradas fortaleciendo así la confianza en el sistema legal, promoviendo la justicia y la verdad en la sociedad.

En atención a estos razonamientos es posible advertir la validación de la variable independiente bajo la siguiente indicación:

La sanción por falsa declaración en la ley de colaboración eficaz no se encuentra debidamente especificada por lo que no produce efectos jurídicos.

5.2.2. Validación de la variable dependiente: “El ámbito de aplicación del artículo 409 del CP”

La identificación del problema que discute esta tesis, como ya se dijo anteriormente se ha basado en la existencia de elementos que bajo la función de conceptos definen la problemática, es así que, la variable dependiente tiene por cargo la descripción de la consecuencia que se produce en virtud de la participación de la variable anterior, como se indica, la percepción de la consecuencia o el efecto está relacionado con el ámbito de aplicación del artículo 409 del ordenamiento jurídico penal peruano, debido a que se trata de un contenido inaplicado ante este tipo de acción.

Sobre lo que se describe líneas arriba se debe indicar que la construcción del tipo penal se configura ante la necesidad de controlar la voluntad de los sujetos que participan en el ámbito del proceso penal, es así

que la aplicación del artículo 409 del Código Penal, representa un instrumento esencial en la preservación de la integridad del sistema de justicia. Para tal fin debe comprenderse a este último como la estructura de control que le permite al Estado mantener el equilibrio del sistema de justicia.

Es importante tener en cuenta que la estructura de control que aplica el ius puniendi del Estado se orienta a la condición de viabilidad jurídica para establecer acciones de sanción que restrinjan derechos bajo la justificación válida necesaria; por lo mismo, su aplicación se encuentra ligada a la evaluación de la lesión y la proporcionalidad de las sanciones impuestas, esto en tanto que la imputación requiere de estos componentes previos para establecerse como medio para alcanzar el reconocimiento o no de la responsabilidad penal, lo que se entiende como fin del proceso penal, encontrar la verdad sobre los hechos delictivos.

Lo señalado implica que las acciones de control que se ocupan específicamente del sistema de justicia conducen a una secuencia de actos jurídicos destinados a la correcta administración, en el caso de las declaraciones falsas se entienden como una alteración de la condición de certeza que se debe alcanzar en el desarrollo del proceso penal. Esta es la condición que se justifica la posibilidad de aplicar el sentido del artículo 409 del ordenamiento sustantivo penal hacia la fase de control de la colaboración eficaz.

Ahora la complejidad para determinar estas características o condiciones para llegar a la punición, nos lleva a contar con pautas claras y precisas que guíen el ejercicio de esta potestad punitiva. Entonces, solo a través de una ponderación meticulosa de los intereses en juego y una interpretación equitativa de la norma, se logrará mantener la confianza de la sociedad en el sistema de justicia y la legitimidad del control que ejerce el estado en el ámbito del Derecho Penal.

De acuerdo al análisis de la incidencia de los acuerdos de colaboración eficaz con falsa declaración que se han producido en el ámbito jurídico nacional, se puede apreciar que las incidencias más relevantes en las que se ha dado las falsas declaraciones son en los casos de corrupción de funcionarios o crimen organizado, por lo que, se sugiere en esta investigación que la condición de exigencia de la veracidad de la información puede no ser suficientemente eficaz para garantizar la correcta evaluación de declaraciones, es por ello, que se propone que exista un equilibrio de protección de los colaboradores, la necesidad de transparencia y veracidad en los procesos de colaboración eficaz, asimismo, se pueda establecer una sanción a aquellos colaboradores eficaces que declaren falsamente con el fin de que se evite un uso indiscriminado de esta figura con el fin de obtener beneficios premiales, sin importarles el perjuicio que puedan generar a terceras personas.

De acuerdo a lo que se ha descrito anteriormente la variable dependiente resulta validada mediante la siguiente indicación:

Es posible ampliar el ámbito de aplicación del artículo 409 del CP en base a la justificación de imputación de su contenido.

5.3. Contrastación de la hipótesis

El desarrollo de la contrastación de la hipótesis ha centrado su observación en el objetivo general de la investigación esto es en determinar si la ausencia de sanción por falsa declaración en la ley de colaboración eficaz justifica la aplicación del artículo 409 del CP, para lo cual se ha generado la validación de las variables en base a las posturas adoptadas en base a la discusión de los objetivos específicos, siendo así estos resultados se unificaron para dar sentido a la determinación final de la tesis, la cual se pone frente a la hipótesis inicial a fin de establecer su rango de contrastación.

5.3.1. Determinación final

La sanción por falsa declaración en la ley de colaboración eficaz no se encuentra debidamente especificada por lo que no produce efectos jurídicos, para tales efectos, es posible ampliar el ámbito de aplicación del artículo 409 del CP en base a la justificación de imputación de su contenido.

Tabla 4: cuadro de contrastación de la hipótesis

Hipótesis inicial	Determinación final
La ausencia de sanción por falsa declaración en la ley de colaboración eficaz se puede utilizar como justificación para aplicar el artículo 409 del CP a fin de salvaguardar la correcta administración de justicia.	La sanción por falsa declaración en la ley de colaboración eficaz no se encuentra debidamente especificada por lo que no produce efectos jurídicos, para tales efectos, es posible ampliar el ámbito de aplicación del artículo 409 del CP en base a la justificación de imputación de su contenido.

Conclusiones

Conclusión general

Se concluye que la sanción por falsa declaración en la ley de colaboración eficaz no se encuentra debidamente especificada por lo que no produce efectos jurídicos, para tales efectos, es posible ampliar el ámbito de aplicación del artículo 409 del CP en base a la justificación de imputación de su contenido.

Conclusiones específicas

Primera:

Se concluye en base a los fundamentos para la sanción por falsa declaración a fin de reconocer su viabilidad en la ley de colaboración eficaz que la imposición de sanciones por declaraciones falsas en el proceso penal resultaría necesaria para asegurar la correcta administración de justicia, salvaguardar los derechos de los imputados y el mantenimiento de un equilibrio entre la búsqueda de la verdad y la imposición de sanciones. Sin embargo, esta aplicación debe realizarse de manera ética y legal, ya que contribuiría a garantizar un sistema de justicia equitativo y justo para todas las partes involucradas fortaleciendo así la confianza en el sistema legal, promoviendo la justicia y la verdad en la sociedad.

Segunda:

Se concluye en base a los fundamentos punitivos que justifican la aplicación del artículo 409 del CP, para reconocer su ámbito de protección, que representa un instrumento esencial en la preservación de la integridad del sistema de justicia. Sin embargo, su aplicación se encuentra ligado a la evaluación de la lesión y la proporcionalidad de las sanciones impuestas. Ahora la complejidad para determinar estas, nos lleva a contar con pautas claras y precisas que guíen el ejercicio de esta potestad punitiva. Entonces, solo a través de una ponderación meticulosa de los intereses en juego y una interpretación equitativa de la norma, se logrará mantener la confianza de la sociedad en el sistema de justicia y la legitimidad del control que ejerce el estado en el ámbito del Derecho Penal.

Tercera:

Se concluye con relación al análisis de la incidencia de los acuerdos de colaboración eficaz con falsa declaración que se han producido en el ámbito jurídico nacional, que son más relevantes en los casos de corrupción de funcionarios o crimen organizado, en los cuales la existencia de veracidad resulta no ser eficaz respecto a las declaraciones; es importante por ello que se viabilice la sanción sugerida por la propia Ley de Colaboración Eficaz, lo cual resulta válido en función a la aplicación del elemento normativo del artículo 409 del Código Penal peruano.

Recomendaciones

Primera:

Se recomienda al Poder Legislativo verificar el sentido de la política pública destinada al control de la incidencia criminal que se orienta a la existencia de las organizaciones criminales, a fin de que se observe el planteamiento de esta investigación en el sentido de la necesidad de establecer un límite a la condición de falsedad de las declaraciones del colaborador eficaz para establecer un criterio de certeza que viabilice el apoyo que se pretende generar para establecer eficacia de esta figura jurídica sin dejar impune la mala fe del colaborador que incurre en este tipo de ilícito.

Segunda:

Se sugiere que la acción estatal antes recomendada se deba dirigir hacia la especificación de la sanción por falsa declaración en la ley de colaboración eficaz mediante la ampliación del ámbito de aplicación del artículo 409 del CP, por lo mismo que el elemento sancionador que se encuentra establecido en este artículo deberá trasladarse al artículo 25 del decreto supremo N° 007-2017-IUS. Esta ampliación deberá quedar de la siguiente manera:

Artículo 25.- Denegación de Acuerdo 1. Si el Fiscal desestima la concesión de beneficios deberá emitir una disposición debidamente motivada, justificando cuál es la causal de denegación: (...) c. Falsedad de la información 2. La denegación de acuerdo genera los siguientes efectos: a. Iniciar cargos contra los sindicatos con la finalidad de procesarlos y perseguirlos bajo el carácter de imputación del artículo 409 del Código Penal. (...)

Bibliografía

- Agustina, J., & Ortiz de Urbina, Í. (2013). *Mentir, hacer trampas, y apropiarse de lo ajeno. Una teoría moral de los delitos de cuello blanco*. Madrid: Marcial Pons.
- Alejandro García, J. (2012). *Falsedad documental y falsedad testimonial. Estudio histórico-jurídico de dos tipos delictivos*. Madrid: Dykinson.
- Bentham, J. (1835). *Tratado de las pruebas judiciales, tomo I*. Madrid: Imprenta de Tomás Jordán.
- Cuellos Blancos: fiscal investiga a Walter Rios por mentir en colaboración eficaz*. (18 de Octubre de 2022). Obtenido de La República: <https://larepublica.pe/politica/judiciales/2022/10/18/cuellos-blancos-fiscal-investiga-a-walter-rios-por-mentir-en-colaboracion-eficaz>
- De la Jara Basombrío, E., & Sanchez Rios, R. (17 de Febrero de 2018). Delación premiada en Brasil; colaboracion eficaz en el Perú. Perú.
- Fernández López, M. (2017). Eficacia procesal de las declaraciones obtenidas en procedimientos de colaboración. *Revsita Derecho & Sociedad*, 1-16. Obtenido de <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/20392/20324>
- Gutierrez Iquise, S. (2018). ¿Constituye delito revelar la identidad de un colaborador eficaz? *LP*. Obtenido de https://lpderecho.pe/delito-revelar-identidad-colaborador_eficaz/

- Hernandez Guijaro , J. (1967). Naturaleza del delito de falso testimonio. *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, 4-18. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2783380>
- Hilgendorf, E. (1993). El concepto de verdad en el Derecho Penal mediante el ejemplo de las teorías de la declaración jurídico-penal. *En letra: Derecho Penal*, 547-559.
- Malca Briones, L. (2021). *La colaboración eficaz y la revocación del acuerdo en caso de falsedad de testimonio*. Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
- Ministerio del Interior. (2019). Política Nacional Multisectorial de lucha contra el crimen organizado 2019-2030. *Tarea Asociación Gráfica Educativa*, 1-85. Obtenido de https://sherloc.unodc.org/cld/uploads/res//treaties/strategies/peru/per0003s_html/PLC_MININTER.pdf
- Ortiz Pradillo, J., & Marchena Gómez, M. (2018). *Los delatores en el proceso procesal penal. Recompensas, anonimato, protección y otras medidas para incentivar una colaboración eficaz con la Justicia*. Madrid: Wolters Kluwer España.
- Pastor Muñoz, N. (2009). Estructura y legitimación de los delitos de peligro del Derecho penal. *InDret*, 1-19.
- Pierbattisti, L., & Salatino, E. (2013). Falso Testimonio. *Asociación Pensamiento Penal*, 1-17. Obtenido de

<https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/cpcomentado/cp37794.pdf>

Rey, P., Benlloch, G., & Agustina, J. (2019). La escasa persecución del delito de falso testimonio: una constatación paradójica. *Política criminal Vol. 14, N° 27*, 65-97.

Rios Patios, G. (2019). ¿Tiene el imputado el derecho a mentir? El derecho a la verdad y el deber de declararla. *CES Derecho*, 1-13. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/cesd/v10n2/2145-7719-cesd-10-02-641.pdf>

Rivero Puente, J. (2022). *El perjurio ante la autoridad judicial y sus implicancias jurídicas en el proceso penal*. Lima: Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Robles Sevilla, W. (2021). *La colaboración eficaz de la persona o entidades jurídicas en el proceso penal peruano*. Lima: Universidad de Salamanca.

Rojas Aguirre, L. (2022). La estructura típica de los delitos de falso testimonio y perjurio. *Política Criminal Vol. 17 N° 33*, 317-346.

Rojas López, F. (2012). Alcances y cuestiones generales del procedimiento especial de colaboración eficaz en el nuevo código procesal penal. *Revista Derecho & Sociedad. 39 (1)*, 52-60.

Ruiz Munilla, J. (2012). La falsedad de declaraciones como instrumento de obstrucción de justicia. Análisis descriptivo de los casos de Estados

Unidos de America y México. *Centro de Estudios en Derecho e Investigaciones Parlamentarias*, 1-37. Obtenido de <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/quorum/article/view/381>

79

San Martín, C. (2015). *Derecho Procesal Penal Lecciones*. Lima: INDECCP, CENALES.

Solorzano Palomino, A. (2021). *La Legislación Penal Peruana sobre la corrupción de funcionarios públicos y la propuesta de tipificación del delito de perjurio*. Lima: Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Ulrich, S. (2008). Acerca del concepto de declaración falsa. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 1-26. Obtenido de <http://criminnet.ugr.es/recpc/10/recpc10-15.pdf>

Vega, L. M. (2018). Historia del falso testimonio: Origenes y Antecedentes de su regulacion en el código penal Chileno de 1874. *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, 3-30. Obtenido de <https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/28175>

Yataco Hernández, G. (2018). *La declaración del imputado y su incidencia en el proceso penal, en el distrito judicial de Lima*. Lima: Universidad Inca Garcilaso de la Vega.